

"Hay, pues, muchos culpables y responsabilidades por asumir. Esperamos que las acciones de control no sean flor de un día, sino un esfuerzo serio y maduro de devolver orden, autoridad y tranquilidad a las carreteras, hoy sinónimo de dolor, caos, indolencia y sangre".

EDITORIAL DEL COMERCIO / 2 DE AGOSTO DEL 2008

## Estrategia antiaccidentes: Y si esta vez no funciona...

La creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial es la última oportunidad del Gobierno para asumir la responsabilidad de frenar la mortal ola de accidentes en carreteras. Esto no puede ser una salida más para justificar la permanencia de algún funcionario, sino la respuesta firme, integral y sostenida a un gravísimo problema de seguridad pública.

Es positivo que se incluyan los ministerios de Transportes, Interior, Salud, Educación y Trabajo, a los que sumarán la Sunat y los gobiernos regionales. Paralelamente, se constituirá un grupo de trabajo para mejorar la normativa interprovincial, en el que estarán presentes el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Indecopi.

¿Debe entenderse esto como un fracaso del plan Tolerancia Cero que lanzó el Ministerio de Transportes? El MTC ha avanzado bastante en infraestructura de carreteras, pero es evidente que tal nombre era una exageración, pues desde sus inicios el control fue difuso y ciertos funcionarios se coludieron con los transportistas.

El reto ahora es elaborar un plan integral, con responsabilidades definidas y fiscalizar su ejecución de modo permanente, sin per-

mitir relajos ni atajos de ningún tipo. Tal plan debe incidir no solo en la aplicación de drásticas sanciones a los infractores, sino también en campañas cívicas y sociales para crear conciencia entre los pasajeros, que muchas veces se confabulan con los choferes para incumplir las normas, por pagar menos o llegar más rápido a su destino, sin pensar en las gravísimas consecuencias.

**Hay que parar la masacre en las carreteras. Y en eso deben asumir responsabilidad todos los sectores involucrados o dar un paso atrás**

Se anuncia la formación de grupos multisectoriales para intervenciones sorpresivas y el aumento de inspectores y policías, que ahora podrán aplicar multas. ¿Y por qué no pensar en helicópteros de control y apoyo rápido que sobrevuelan las vías principales?

A todo ello debe agregarse la implementación urgente, por parte del MTC y las municipalidades, de terminales terrestres,

no solo para comodidad de transportistas y pasajeros, sino porque es el mejor lugar para empezar a controlar. La lucha contra las empresas informales debe ser igualmente implacable.

A las empresas, en tanto, debe exigírseles el SOAT, la instalación de tacómetros y equipos satelitales, así como una mejor selección, entrenamiento y trato de sus choferes. Estos empresarios tienen que ponerse la mano al pecho y no buscar pretextos. ¿Cómo es posible que autoricen la salida de un solo chofer para un viaje de más de 16 horas de Lima a Tumbes? ¿Solo por ganarse unos soles más ponen en peligro la vida de tantas personas? Estas faltas cuasi delictivas deben tener responsabilidad penal y sanciones severas.

Hay que parar la masacre en las carreteras. La ciudadanía exige clamorosamente que viajar por las carreteras no sea un juego de azar para su vida, sino un servicio cómodo y seguro por el que se paga un precio justo. Y en eso tienen que asumir responsabilidad todos los sectores involucrados, empezando por la ministra de Transportes, o dar un paso atrás para que otros más eficientes y motivados hagan cumplir esta obligación del Estado. ■

### SE CONFIRMA SATURACIÓN DEL DUCTO DE CAMISEA

## ¿Empezó el racionamiento?

Aurelio Ochoa Alencastre  
Analista



Viene de confirmarse oficialmente la temprana saturación de la capacidad del ducto Camisea-Lima, conforme lo advirtiera esta página (*El Comercio*, 24/6/2008), por tanto, el racionamiento de gas natural y los efectos inherentes que penden sobre el suministro eléctrico, entre los cuales, la inesperada próxima elevación de tarifas, parámetro varias veces descartado.

El contrato de concesión de transporte de gas natural estipula que el titular deberá garantizar la disponibilidad oportuna (no el uso) de 450 millones de pies cúbicos diarios (Mmpcd) a cambio de la Garantía de Red Principal (GRP) que pagamos los usuarios eléctricos. La capacidad del ducto en el City Gate de Lurín llega alrededor de 300 Mmpcd, volumen hoy copado y que las estadísticas lo advirtieron a fin de tomar acciones oportunamente, las que debieron formularse en las modificaciones contractuales que propició el régimen pasado.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que viene negociando con el concesionario la ampliación de la capacidad

del ducto en una primera etapa, a través de la instalación de un sistema de compresión a culminar en setiembre del 2009, el mismo que permitirá garantizar un adicional gasífero entre 80 y 100 Mmpcd para Lima-Callao (y el diferencial para Ica), modestos volúmenes que probablemente serán absorbidos en menos de un año, dado el incremento vertiginoso de la demanda, consecuencia del crecimiento sostenido de nuestra economía. ¿Y después

“El ducto de exportación podría ser utilizado para abastecer la prioritaria demanda interna”

qué? ¿Seguirá el racionamiento de gas a las termoeléctricas? ¿Cómo garantizar el tema energético de los TLC?, etc. Se anuncia que en una segunda etapa se ampliaría una capacidad adicional. Preocupa sin embargo que el costo de esta ampliación prevista contractualmente (y la complementaria que pueda producirse), vaya a trasladarse a los usuarios, lo que restaría competitividad al aparato productivo, no por el precio del

gas, sino por el sobrecosto del transporte.

Ante aquel escenario de solo ampliaciones que seguramente igual pronto se saturarán, resulta imperativo optar por la impostergable construcción de un nuevo ducto Camisea-Lima, tecnológicamente confiable, lo que debiera inducirnos ya a una Convocatoria Internacional para una capacidad mínima de 1.200 Mmpcd, la cual sí garantizaría por buen tiempo el crecimiento del consumo, incluidos la petroquímica y los ductos regionales (Lima-Chimbote, Pisco-Marcona, y otros proyectados). Mientras dure esa construcción, el ducto de exportación sería utilizado para abastecer la prioritaria demanda interna.

En la masificación del gas natural automotor poco hemos avanzado, pese al alto precio del petróleo y derivados. Más aún, el subsidio indiscriminado que representan los enormes recursos del Fondo de Estabilización (más de S/2.500 millones a la fecha), en la práctica –y en desmedro del gas–, han congelado el precio de los combustibles petrolíferos, incentivando su masivo consumo que en el caso del diésel (el más contaminante), se ha incrementado en 23%, mientras seguimos esperando el varios veces ofrecido bono del ‘chatarreo’ vehicular, al igual como fueron los recurrentes anuncios de replantear aquel fondo, cuya insostenible inequidad viene de ser confirmada por el MEF al señalar que solo el 5% del mismo favorece a los pobres (*El Comercio*, 5 y 8 de agosto). Sobre el particular, compartimos las declaraciones hechas en la víspera por el presidente García, pues resulta inaudito que el fondo subsidie entre otros a la minería, existiendo tantas otras necesidades sociales.

Finalmente, bajo aquel preocupante escenario energético, viene de producirse una muy plausible decisión gubernamental: apostar por el (o los) gasoducto(s) andino(s), proyecto(s) que sin demandar al Estado una GRP ni subsidio alguno, su construcción, independizará el actual ducto de Camisea, e indudablemente será decisiva para garantizar el desarrollo socio-económico de la macrorregión sur en los próximos decenios. ■

### HUMOR PROFANO

Por Molina



### QUE EL MAR DEJE DE SER CLOACA

## Por una verdadera Costa Verde

Salvador Heresi  
Alcalde de San Miguel



En sintonía con la demanda actual por defender el medio ambiente, el presidente Alan García ha anunciado la próxima construcción de dos plantas de tratamiento de aguas servidas que permitirán recuperar los 26 kilómetros de mar limeño que actualmente se encuentran contaminados. Con ello se pondrá por fin freno al acelerado proceso de contaminación producido por más de 20 mil litros de aguas servidas que infestan la costa de Lima. Es decir, dos estadios nacionales ‘llenos’ de desagües terminan en nuestro mar.

Preocupados por esta situación, los vecinos de San Miguel habíamos solicitado ya en múltiples ocasiones la clausura del colector costanero. Y hoy que esa demanda ha sido finalmente recogida por el Gobierno, nos ratificamos en la importancia de la iniciativa, que tiene un profundo contenido social: reutilizar las aguas servidas es revitalizar la ciudad, principalmente en las zonas más deprimidas, donde tener agua es un lujo; y

contar con parques y jardines, un sueño inalcanzable.

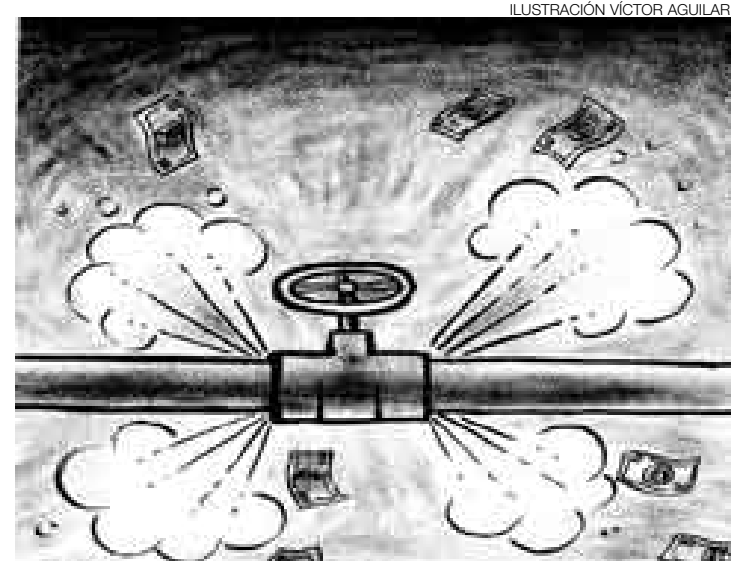
La descontaminación del litoral capitalino no solo permitirá atraer a bañistas de los conos sur y norte, sino también a inversionistas que apuesten por un desarrollo integral de cara al mar, con la promoción de infraestructura moderna que no resulte agresiva para el paisaje. Será, además, una magnífica oportunidad para incrementar los cerca de 14 millones de m<sup>2</sup> de áreas verdes que Lima ofrece a sus pobladores, los mismos que lastimosamente no llegan a cubrir los 8 m<sup>2</sup> por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No tiene sentido gastar millones en una planta de tratamiento si no se utiliza el agua tratada para cubrir de verde los cerros que rodean los asentamientos humanos de nuestra ciudad.

Es importante resaltar que la decisión es una positiva señal de avance en materia de soluciones para afrontar la crisis ambiental global. Pero debemos advertir al mismo tiempo que los sanmiguinos que sentimos la decisión presidencial como la exitosa coronación de cinco años de movilizaciones y protestas subrayamos la necesidad de fiscalizar el

cumplimiento oportuno de las obras. Particularmente, porque entendemos que cualquier esfuerzo de esta naturaleza será vano si no se procede a una reingeniería en Sedapal.

Como se sabe, esa empresa ha gastado 180 millones de soles en el interceptor norte y 500 millones en el proyecto Mesías, dos obras supuestamente destinadas a clausurar los colectores de Lima, pero que hoy funcionan solo parcialmente al 15%. Esto sugiere claramente que fueron ejecutadas en forma antitécnica. No se entiende por qué la Contraloría y el Congreso de la República no investigan este escandaloso uso indebido de los recursos públicos.

Construir una cultura medioambiental que responda al reto que constituye hoy en día el calentamiento global para la humanidad es una tarea que nos corresponde a todos. Ciudadanos y autoridades locales, regionales y nacionales debemos ser los protagonistas de una gran movilización que promueva el crecimiento sin sacrificar los recursos naturales ni precipitar su degradación, con una visión de desarrollo integral de nuestra ciudad. Por cierto, que esto no pasa por permitir el borron y cuenta nueva. ■



### rincón del autor

Hugo Guerra



Si este Parlamento no se autocontrola mínimamente y si no se introducen reformas constitucionales urgentes, se estarán abonando las posiciones antisistema

## El Congreso desquiciado

Mesurado lector, el caso de Margarita Sucari (UPP), quien descontaba parte del pago de una auxiliar, so pretexto de que “Así es acá, todo el mundo comparte”, quizá no sea el más escandaloso entre todos los registrados en esa olla de grillos que es el Congreso de la República desde el 2001. Pero, sin duda, es la gota que derrama el vaso de la paciencia nacional.

Allí hubo y hay de todo: desde violadores sexuales hasta litera-

les mataperros, pasando por nepotistas, requisitoriados penales, coimeros y simples badulaques.

Insisto en que de 120 congresistas quizá apenas 40 tienen calidad ética, profesional y democrática.

¿La pregunta clave, como trilladamente repetía Lenin al inicio de su revolución, es qué hacer?

Provoca cortar de raíz tanta inutilidad y respaldar la propuesta de Aurelio Pastor respecto a ir hacia una renovación total del Congreso. Pero de momento eso es imposi-

ble por la vía constitucional.

A mediano plazo, en cambio, puede avanzarse con tres reformas constitucionales claves: primero debe acabarse con el voto preferencial que únicamente sirve para corromper a los partidos, en tanto facilita que el poder del dinero no siempre bien habido de algunos candidatos se imponga por encima de la voluntad de las bases y las dirigencias.

Segundo, debe aprobarse la renovación por tercios, porque mientras a los ineptos se les des-

tabilidad laboral, con una inmunidad que ha trocado en impunidad, no existe sanción posible.

Tercero, tiene que restituirse el Senado cuya función vital es filtrar la legislación inmadura de la Cámara Baja.

Entre tanto, se requiere una renovación integral de la mayor parte de organizaciones políticas. Sus ideologías, programas y propuestas electorales deben consolidarse para no actuar con ese veletismo que hoy, penosamente, se comprueba con el uso necio y maniqueo de las etiquetas de ‘derecha’ e ‘izquierda’.

El oportunismo y la improvisación igualmente deben cesar para

que no se repitan escándalos como el protagonizado por el llamado Partido Nacionalista que utilizó, a manera de vientre de alquiler, a Unión por el Perú.

Conste, además, que la misma UPP sigue utilizando sin respeto alguno ese nombre y hasta traiciona la propuesta que impulsó su ilustre fundador, don Javier Pérez de Cuéllar.

La concertación necesita, asimismo, reevaluarse. Trabajar con respeto por la diversidad no equivale a intentar pactos contra natura, como el que un sector de Unidad Nacional intentó con el humalismo para lograr la presidencia del Congreso,

a costa de romper con Solidaridad Nacional. Es decir con la fuerza que sostenía una alianza precaria.

Contra natura también sería el pacto Apra-Fujimorismo, porque como dice Vargas Llosa, eso implicaría una catástrofe para el sistema democrático peruano.

Por lo demás, Javier Velásquez Quesquén, el tercer presidente congresal del oficialismo y los otros miembros de su mesa directiva deben advertir que, si no remontan aunque sea mínimamente la crisis política y moral por la que atraviesa el Legislativo, el 2011 los grupos antisistema utilizarán este caso para desacreditar la democracia. ■